

«Gobernar es elegir»

ESTOY convencido de que si Suárez hubiera afrontado su investidura de marzo del 79 con el mismo talante con que lo ha hecho Calvo-Sotelo ahora, la salud de la nación no sería en estos momentos tan mala. No se trata de hacer leña del árbol caído, pero lo ocurrido la semana pasada en el Congreso constituye todo un alegato, por la vía del contraste, frente al comportamiento del hasta ayer inquilino de la Moncloa.

Si no existiera ya este elemento de referencia, podría haber quedado flotando en el ambiente la queja lastimera de un Adolfo Suárez capaz de denunciar en televisión las «descalificaciones globales» de que había sido víctima por parte de la prensa. Quienes veníamos escribiendo desde hace más de dos años que su gran defecto —compendio de todos los demás— era su incapacidad de entender la entraña de lo que significa gobernar en democracia, podremos, sin embargo, añadir a partir de ahora un ejemplo de lo que queríamos decir, extraído de las propias filas de UCD.

Desprovisto del carisma personal de Suárez y desprovisto también de su bagaje histórico como ingeniero del tránsito, Calvo-Sotelo ha tenido el acierto inicial de asumir exactamente el papel que la Constitución asigna al candidato a jefe de Gobierno. Su planteamiento no ha sido el del «heredero del imperio» que se limita a tomar posesión de cuanto patrimonialmente se le transfiere, sino el de un hombre realista y pragmático que pide ayuda a las distintas instituciones y estamentos para intentar arreglar algunas cosas con medios ciertamente limitados.

«Democracia valiente»

Calvo-Sotelo es consciente de que cuanto más avancemos en la consolidación de la democracia, mayor será la dispersión del poder y no va a caer, por tanto, en el error de su antecesor, que pretendió seguir mandando como si aún existieran los márgenes de discrecionalidad propios del sistema que él mismo había dinamitado. El nuevo presidente se da cuenta de que la alta magistratura que a partir de esta tarde encarnará, no es sino parte de un detallado engranaje de equilibrios y controles en el que cada pieza debe cumplir una función concreta y limitada. Todo parece indicar que Calvo-Sotelo está dispuesto a potenciar el Consejo de Ministros como órgano colegiado, a respetar la autonomía democrática del partido que le ha elegido y a rendir cuentas periódicas, tanto a través del Parlamento, como a través de la prensa, cuantas veces sea preciso. Gobernará mal o bien, se equivocará mucho o poco, pero no creo que tengamos que perseguirle con la escopeta cargada para que cumpla con su obligación.

«Gobernar es elegir», dijo al comienzo de la exposición con que se abrió su maratónico y agotador examen de tres días. Esta frase, que al final le hará desembocar en el concepto de «democracia valiente», debería quedar grabada en el frontispicio del palacio de la Moncloa, por si alguna vez vuelve a habitarlo alguien imbuído de la alucinación suarista de hacer todas las políticas a un tiempo con el ánimo de contentar a todos a la vez.

Estoy seguro de que a Calvo-Sotelo jamás se le ha pasado por la cabeza el delirio de los ciento siete años. Sabe, por el contrario, que su mandato es perecedero y que probablemente será corto. Por

eso, creo que conseguirá concluir la legislatura: sólo quien se considera inmarcesible puede permitirse el lujo de la inmovilidad y la parálisis; cuando nos sentimos presionados por el vencimiento de unos plazos es, en cambio, cuando mayor actividad desplegamos y es, precisamente, en esa actividad en la que se asientan las bases, primero de nuestra supervivencia, después de nuestro desarrollo.

La «homologación occidental de España»

El país está mucho más vivo, mucho más deseoso de ponerse en marcha de lo que la presente atonía puede sugerir. Hacia falta que se le marcara un rumbo claro y ahora ya lo tiene. Calvo-Sotelo ha «elegido» un plan de prioridades que todo el mundo entiende: desarrollo de la energía nuclear; incremento de la productividad estimulando la recuperación empresarial; plan de lucha contra el paro pactado con la patronal y las centrales; control de la inflación mediante la reducción del déficit público; ingreso en la CEE y la Alianza Atlántica, culminación en dos años del proceso autonómico.

Si exceptuamos el último objetivo, genuinamente relacionado con nuestro tránsito político, todos los demás podrían englobarse bajo el rótulo de la «homologación occidental de España». Todas las democracias atlánticas han apostado decididamente por las centrales atómicas, basan en recetas neoliberales su estrategia de recuperación económica y tratan de perfeccionar sus mecanismos de seguridad frente a la amenaza del bloque soviético.

Nadie con un cierto sentido del equilibrio considera en Europa o los Estados Unidos que ésta sea una política «reaccionaria», y si en algunos casos le cuadra bien la etiqueta de «conservadora» es porque se habla de países que desde hace al menos cuatro décadas han asentado en esos mismos parámetros políticos una tradición de estabilidad y bienestar que sus ciudadanos quieren lógicamente «conservar». No es este el caso de España, y de ahí que la única personalidad occidental expresamente aludida por Calvo-Sotelo durante el debate no haya sido ni la Thatcher, ni Reagan, sino el presidente de la Internacional Liberal, Gaston Thorn.

Quienes interpretamos los acontecimientos políticos para el hombre de la calle tenemos que intentar liberarnos del maniqueísmo apriorista que los actores del retablo utilizan para descalificar a sus competidores. Si las propuestas de Calvo-Sotelo funcionan, no serán «conservadoras» sino «progresistas», porque ayudarán a «progresar» a una colectividad atrasada y aturdida. Tan falsa como la idea del ocaso de las ideologías es la pretensión de analizarlo todo en función de un calidoscopio ideológico compuesto de inamovibles clichés. No le faltaba razón al candidato cuando alegó que hay veces en que las soluciones no son ni de izquierdas ni de derechas, porque son simplemente soluciones.

Más la «despensa» que la «escuela»

Esta defensa del afluente de esperanza que significa la investidura de Calvo-Sotelo resultaría, sin embargo, tan incompleta y tendenciosa como la mayoría de las críticas formuladas en su contra, si no advirtiera que, junto al bienestar material y la estabilidad política exis-



«Una de las mejores cosas que podrían decirse de la etapa que ahora inicia Calvo-Sotelo es que sirvió para que los socialistas llegaran al poder en un clima de consolidación y asentamiento»

te otro atractivo horizonte de progreso en el que el candidato apenas si ha incidido. Me refiero al ámbito de las libertades públicas, derechos humanos y garantías individuales: las reglas del juego que aseguran, en suma, la justicia redistributiva del sistema, por la vía de la igualdad de oportunidades.

Está claro que de las dos obsesiones de Joaquín Costa a Calvo-Sotelo le preocupa mucho más la «despensa» que la «escuela». Mucho me temo que, al cabo de casi ocho años de crisis económica, ése sea también el estado de ánimo de la mayoría de los ciudadanos. Y, sin embargo, no será posible palpar un verdadero «regeneracionismo» español hasta que ambos planos vayan acompañados y el hombre de la calle perciba una estrecha relación entre la vigencia de un sistema de libertades y la mejora de su calidad de vida.

Aunque pueda alegarse que estamos ante un círculo vicioso, la historia demuestra que la democracia es al final un asunto de elevada renta per cápita y baja tasa de inflación. De ahí que me parezca que una de las mejores cosas que podrían decirse de la etapa que ahora inicia Calvo-Sotelo es que sirvió para que el Partido Socialista llegara al poder en un clima de consolidación y asentamiento. El diálogo entre el candidato y Felipe González en la última sesión del debate sirvió para demostrar que de los intentos que hagan ambos pueden surgir beneficios para España y que ninguna de las dos alternativas va a producir ya niveles de crispación insostenibles en aquellos electores que se sientan más identificados con la otra. Lo ideal sería que al cabo

de dos décadas pudiéramos girar la vista atrás y contemplar diez años de hegemonía socialista, entreverados en otros tantos de hegemonía centrista.

Y lo ideal sería, también, que cualquier correctivo a este esquema de turnismo bipartidista llegara a través de opciones intermedias como las minorías nacionalistas o el tan traído y llevado partido-bisagra. Lo que ha demostrado este debate es que ni Carrillo ni Fraga tienen absolutamente nada que aportar a la sociedad española, sino agresividad e intolerancia. El gastado líder comunista no ha podido recuperarse del duro golpe que para su solidez dialéctica ha supuesto el desenlace del congreso del PSUC, por la sencilla razón de que su eurocomunismo jamás fue un planteamiento activo. Fraga nunca podrá ser otra cosa sino un acendrado ególatra —tan brillante como soberbio—, incapaz de distinguir entre su propia conveniencia y la de la nación. Tal y como ha quedado subrayado por la enérgica pero civilizada reacción del conde de Motrico, su comportamiento en esta encrucijada ha perjudicado notablemente los intereses y anhelos de sus electores menos exaltados.

Ordóñez y Rosón

Todo indica que Calvo-Sotelo va a redondear la imagen de eficacia proyectada en el Parlamento, mediante un rápido anuncio de la composición del nuevo Gobierno. Su armazón básico será, al parecer, el mismo del Gabinete hasta hoy en funciones, sin duda el mejor de los constituidos por Suárez. Desde esta perspectiva de continuidad en lo positivo, sería muy aconsejable el mantenimiento en sus actuales cargos de Fernández Ordóñez y Rosón, dos ministros muy controvertidos en los últimos días desde perspectivas diferentes.

Sería decepcionante que el nuevo Gobierno alterara algún aspecto sustantivo de la ley de Divorcio, obligando así al ministro de Justicia a dejar el puesto. Retoques técnicos al margen, el actual proyecto supone una importante conquista para la libertad individual de la que sería muy triste retroceder. Esto no significa, naturalmente, que los periódicos debamos ocuparnos cada uno de los trescientos sesenta y cinco días del año de lo que hará el Gobierno con relación al divorcio, pues si bien es cierto que, quien más quien menos, todos hemos pensado en nuestros woodyallenescos «sueños de seductor», en usar dicha posibilidad legal al menos con una docena de mujeres diferentes, luego la realidad nos indica que son otros los problemas que le agobian a la gente.

Sé que no es popular defender a Rosón en un momento como éste, pero me permite hacerlo el hecho de escribir en un periódico que desde el mismo día que publicó la muerte de Arregui llamó a las cosas por su nombre y exigió implacables acciones legales contra los implicados. Nadie puede negar que un ministro es políticamente responsable de los actos de sus subordinados y que en cualquier país normalizado su cese habría llegado de manera automática. Pero en nuestro caso cabe formular dos interrogantes que inciden y modifican esta regla general. ¿Qué hubiera ocurrido con nuestra infraestructura de seguridad interior de no mediar en las difíciles horas del martes y miércoles la mano de hierro con guante de seda de Juan Rosón? ¿Existe otra persona en mejor situación que él para llevar a cabo la imprescindible reforma de la Policía con la máxima celeridad y la mínima pérdida de eficacia posibles?